JUZGADO VEINTICINCO CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá D.C., veintinueve de junio de dos mil veintitrés.

Acción de Tutela No. 110013103 025 2023 00300 00.

Resuelve el juzgado la acción de tutela formulada por YU-JU HSU contra el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, dentro de la cual se vinculó a TEXTILES 926 S.A.S. y CANCELLERÍA DE COLOMBIA.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demandante YU-JU HSU promovió acción de tutela en contra del mencionado Ministerio, implorando la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad y debido proceso; y en consecuencia, solicitó que se ordene al accionado *“...revise y procese mi solicitud de VISA EN CALIDAD DE MIGRANTE SOCIA PROPIETARIA (M), radicada a través de través de la plataforma SITAC con el número de solicitud 029419000022755, teniendo en cuenta todos los documentos presentados”* y *“...se abstenga de exigir requisitos adicionales injustificados o de obstaculizar injustamente el proceso de solicitud de visa...”*

1.2. Como fundamento fáctico relevante se expuso, en síntesis, que el 22 de marzo de 2023 presentó solicitud de visa ante el Ministerio convocado, en calidad de socia y accionista mayoritaria de la compañía TEXTILES 926 S.A.S, la cual fue inadmitida el 12 de abril del año en curso, donde se le solicitaron una serie de documentos relacionados con *“a. Presentación de la visa de los otros accionistas de la empresa TEXTILES 926 S.A.S. b. Planilla de la seguridad social de la nómina de la empresa TEXTILES 926 S.A.S. c. Solicitud de nuevos extractos bancarios. d. Presentación de planillas de pago por parte de mi antiguo empleador. e. Presentación de la certificación de desvinculación emitida por la plataforma SIRE de Migración Colombia”*.

Por lo anterior, el 20 de mayo de esta anualidad, realizó una segunda solicitud de *“VISA EN CALIDAD DE MIGRANTE SOCIO PROPIETARIO (M)”*, a través de la plataforma *“SITAC”* del Ministerio de Relaciones Exteriores, adjuntando la documentación requerida, a la cual se le asignó el radicado 029419000022755. Sin embargo, el 13 de junio recibió respuesta por parte de la accionada, en la que se le informó un error presentado en el cargue de los documentos, solicitándole nuevamente adjuntarlos antes del 15 de junio.

No obstante, pese a que intentó en múltiples oportunidades realizar dicha labor en el lapso otorgado, los resultados han sido infructuosos, por lo que, a la fecha no ha sido posible obtener la visa requerida, lo que en su sentir, transgrede los derechos invocados.

1.3. Asumido el conocimiento de la presente causa por parte de este estrado judicial, se dispuso oficiar al accionado y vinculadas, a fin de que rindieran un informe detallado sobre las manifestaciones contenidas en el escrito de tutela, y asimismo, remitieran copia de la documentación que para el caso en concreto correspondiera.

1.4. EI MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, por intermedio de la Directora de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano, manifestó, que revisado el expediente migratorio de la accionante en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano – SITAC, se observó como último registro una solicitud de visa de Migrante Socio Propietario, la cual se encontraba desistida. No obstante, tras dar continuidad al caso de la extranjera, se evidenció una posible falla tecnológica dentro de la solicitud de la actora, razón por la que el 22 de junio de 2023 fue requerida nuevamente y se le otorgó una opción excepcional para enviar la documentación necesaria, al correo visa.notificaciones@cancilleria.gov.co, indicándole el término con el que cuenta para ello.

De dicho requerimiento fue notificada la actora el mismo 22 de junio a través del buzón santiago.pinzon@cuadrolegal.com registrado por la tutelante en la solicitud de visa, por lo que solicitó la negación del amparo por hecho superado.

1.5. Por su parte, TEXTILES 926 S.A.S. no allegó el informe requerido, en el término otorgado.

2. CONSIDERACIONES

2.1. La Constitución Política en su artículo 86 estableció la acción de tutela, con el objeto de que toda persona pueda reclamar en todo tiempo y lugar, mediante un procedimiento breve y sumario la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de particulares en casos excepcionales.

2.2. El presente trámite se inició por la presunta vulneración de los derechos a la igualdad y debido proceso. El primero se encuentra previsto en el artículo 13 de la Constitución Política, así como en instrumentos internacionales de derechos humanos que, en virtud del artículo 93 numeral 2, hacen parte del bloque de constitucionalidad. La Corte Constitucional ha sostenido, que de este derecho se desprenden dos mandatos básicos: *“(i) otorgar el mismo trato a supuestos de hecho equivalentes y (ii) otorgar un trato diferente a situaciones de hecho disímiles. Como se observa, el rasgo esencial del derecho a la igualdad es que implica un juicio de comparación entre dos personas o grupos de personas. Para determinar con mayor precisión el alcance del derecho a la igualdad, la Corte ha especificado estos dos mandatos generales en cuatro reglas, a saber: (i) debe darse un tratamiento distinto a situaciones de hecho que no tienen ningún elemento en común; (ii) debe darse el mismo trato a situaciones de hecho idénticas; (iii) debe darse un trato paritario a situaciones de hecho que presenten similitudes y diferencias, cuando las similitudes sean más relevantes que las diferencias; y (iv) debe darse un trato diferente a situaciones de hecho que presenten similitudes y diferencias, cuando las diferencias sean más relevantes que las similitudes”*¹.

El derecho al debido proceso está contemplado en el artículo 29 de la Constitución Política que establece:

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”, prerrogativa que sin duda ante su desconocimiento es susceptible de protección por vía de la acción de tutela”.

2.3. En este asunto se observa que el accionante pretende que, a través de la presente acción de tutela, se revise y procese su solicitud de *“VISA EN CALIDAD DE MIGRANTE SOCIA PROPIETARIA (M), radicada a través de través de la plataforma SITAC con el número de solicitud 029419000022755”*.

Al respecto, con la respuesta otorgada por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, se observa que dicha entidad, reactivó su caso, y mediante requerimiento del 22 de junio de 2023 intimó a la accionante para que

¹ Sentencia C-571/17

presente una serie de documentos necesarios para la expedición de la visa solicitada, para lo cual, le concedió el término hasta el lunes 03 de julio de 2023, remitiendo la documental al correo visa.notificaciones@cancilleria.gov.co, necesaria para la continuación del trámite en mientes; requerimiento que de acuerdo con lo informado por la accionada, fue notificado a la actora en esa misma fecha a través del buzón santiago.pinzon@cuadrolegal.com registrado por la demandante en la solicitud de visa, y en la tutela; escrito que además obra en el expediente a disposición de la accionante.

Lo anterior permite concluir, que con oportunidad de la interposición de la presente acción y la vinculación del Ministerio conminado, las pretensiones de la demandante fueron atendidas, pues se dispuso las actuaciones necesarias para la continuación del trámite de solicitud de visa, requiriendo la documental allí indicada por la convocada, y que deberá ser presentada por la actora; razón que permite establecer que ha cesado la vulneración a la garantía fundamental invocada, configurándose así la carencia actual de objeto por hecho superado, figura respecto de la cual, la Corte Constitucional, ha expresado:

“La jurisprudencia constitucional ha establecido que en caso de que al momento de fallar se advierta que la acción u omisión que dio origen a la pretensión de tutela ha cesado, el pronunciamiento del juez de tutela carece de objeto, pues la amenaza o vulneración de derechos fundamentales que antes se alegaba se torna inexistente. Por tanto, el operador judicial se encuentra ante la imposibilidad de emitir alguna orden en pro de proteger las garantías fundamentales que en principio se consideraron afectadas.

Lo anterior puede ocurrir en tres supuestos, a saber: (i) el hecho superado; (ii) el daño consumado, o (iii) cualquier otra situación que conduzca a que carezca de sentido la orden a dictar para satisfacer la pretensión de la solicitud de tutela.

Al referirse al hecho superado, el Tribunal ha indicado que es aquella situación que se presenta cuando durante el trámite de la tutela o de su revisión, cesa la vulneración o amenaza del derecho que se buscaba proteger con la solicitud de tutela como consecuencia de una actuación por parte del demandado. En consecuencia, el accionante, en principio, ya no tiene interés en la satisfacción de su pretensión pues la causa que motivó la solicitud de tutela ha desaparecido”²

3. CONCLUSIÓN

En estas condiciones la acción promovida deberá negarse en el entendido que la vulneración ha cesado, al comprobarse la existencia de un hecho superado.

4. DECISIÓN DE PRIMER GRADO

² Corte Constitucional, sentencia SU453 de 2020.

Con fundamento y apoyo en lo dicho, el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de Bogotá D.C., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

4.1. Negar la acción de tutela propuesta por YU-JU HSU contra MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, por lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

4.2. Notificar este fallo conforme a lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

4.3. Remitir las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no es impugnada.

Notifíquese y cúmplase.

El Juez,

LUIS AUGUSTO DUEÑAS BARRETO

DLR

Firmado Por:
Luis Augusto Dueñas Barreto
Juez

Juzgado De Circuito
Civil 025
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **8a76d7c9012dde4cab4f144a7590b3125651f59bcc84478db524c2fa27fbbad8**

Documento generado en 29/06/2023 08:04:25 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>